# León, Guanajuato, a 17 diecisiete de febrero del año 2020 dos mil veinte.

***V I S T O S*** para dictar sentencia definitiva, los autos del proceso administrativo identificado con el número **1520/2doJAM/2019-JN*,*** promovido por el ciudadano (…); y, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***R E S U L T A N D O :***

***PRIMERO.-*** Mediante escrito de demanda administrativa, presentado en fecha **9** nueve de **julio** del año **2019** dos mil diecinueve, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Administrativos de este Municipio, el ciudadano (…), por su propio derecho, promovió proceso administrativo en el que señaló como. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**a).- Acto impugnado:** Las sanciones administrativas impuestas por el Director General de Policía, contenidas en las boletas de arresto con números de folio **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco, **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once), **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta), **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete); de cuyas sanciones, señaló que tuvo conocimiento el día **1** uno de **Julio** del año **2019** dos mil diecinueve; las que se emitieron por diversas faltas; elaboradas por los elementos de policía (…). . . . . . . . . . . . .

**b).- Autoridad demandada:** Señaló como tal al Director General de Policía de León, Guanajuato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**c).- Pretensiones:** La nulidad total de los actos impugnados y el reconocimiento de un derecho amparado en la norma jurídica. . . . . . . . . . . . . . . . .

***SEGUNDO.-*** Por razón de turno, este Juzgado Segundo Administrativo se avocó al conocimiento del presente proceso, por lo que por auto de fecha **11** once de **julio** del **2019** dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, en contra de la autoridad demandada; asimismo, se tuvo a la actora por ofrecida la documental consistente en petición formulada al director general de policía municipal, la que se tuvo por desahogadas desde ese momento, dada su propia naturaleza; y la presuncional legal y humana en lo que beneficie al oferente. . . . .

Por otra parte, se le requirió al Director General de Policía demandado, exhibiera las boletas de arresto impugnadas, al haber acreditado el ciudadano, que las solicitó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Respecto de la suspensión solicitada, **se concedió** dicha medida cautelar, al para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en el que se encontraban a la presentación de la demanda; y hasta en tanto se dicte la resolución definitiva; debiendo abstenerse las demandadas de ejecutar las boletas de arresto impugnadas o en su caso interrumpir su ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . .

De este modo, se ordenó emplazar y correr traslado a la autoridad señalada como demandada para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra; lo que realizó el Director General de Policía (…), mediante escrito presentado el día **12** doce de **agosto** del **2019** dos mil diecinueve, (palpable a fojas 13 trece a la 26 veintiséis); en la que manifestó causales de improcedencia, dio contestación a los hechos y respectos a los concepto de impugnación refirió que estos eran infundados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***TERCERO*.-** Por proveído del día **14** catorce de **agosto** del año **2019** dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad demandada por contestando la demanda, en tiempo y forma legal, así mismo se formuló requerimiento al director de policía a fin de que incorporara al precedente, la boleta de arresto 82,225 (ochenta y dos mil doscientos veinticinco). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Igualmente, se tuvieron por ofrecidas y admitidas como pruebas, la admitida a la parte actora, copias certificadas de las boletas de arresto **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once), **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta), **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete) pruebas que dada su naturaleza se tuvieron por desahogadas; así también la presuncional legal y humana en lo que le beneficie. . . . . . . . . . . . . . . . .

**CUARTO.-** En auto de fecha 26 veintiséis de agosto de 2019 dos mil diecinueve se tuvo al autorizado del director de policía, en fecha 22 veintidós de agosto de 2019, anexando la boleta de arresto **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) y de este modo, al no existir pruebas pendientes de desahogo y por ser el momento procesal oportuno, en el segundo acuerdo citado, se ordenó citar a las partes a la Audiencia de Alegatos, a celebrarse el día **24** veinticuatro de **enero** del año **2020** dos mil veinte; a las **10:30** diez treinta horas, en el recinto de este Juzgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**QUINTO.-** En la fecha y hora señaladas en el resultando anterior, se llevó a cabo la audiencia de alegatos en la que, una vez declarada abierta, la Secretaria de Estudio y Cuenta hizo constar la **inasistencia** de las partes y que no se formularon alegatos; turnándose los autos para el dictado de la resolución que en derecho proceda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***C O N S I D E R A N D O :***

***PRIMERO.-*** Este Juzgado Segundo Administrativo Municipal es competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, en base a lo previsto por los artículos 241, 243, párrafo segundo y 244, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como en lo dispuesto en los artículos 1, fracción II y 3, párrafo segundo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en virtud de que se impugnan actos atribuidos al titular de la Dirección General de Policía Municipal; autoridad que forma parte de la administración pública municipal de León, Guanajuato. . . . . . . .

***SEGUNDO.-*** La demanda fue presentada oportunamente dentro de los 30 treinta días hábiles siguientes a aquél en que se ostentó el actor, como conocedor de la calificación de las boletas de arresto impugnada, lo que fue el día **1** uno de **Julio** del año **2019** dos mil diecinueve, sin que de las constancias de autos se desprenda lo contrario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***TERCERO*.-** La existencia de los actos impugnados, consistentes en las sanciones administrativas impuestas por el Director General de Policía, contenidas en las boletas de arresto con números de folio **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco, **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once), **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta), **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete); se encuentran documentadas en autos, con las copias certificadas de las misma boletas, las que son visibles en el expediente de este proceso, a fojas 28 (veintiocho), 30(treinta), 32(treinta y dos) ,34 (treinta y cuatro), 36 (treinta y seis), 38 (treinta y ocho), 40(cuarenta), 42(cuarenta y dos), 44 (cuarenta y cuatro), 46(cuarenta y seis), 48 (cuarenta y ocho) y 55 (cincuenta y cinco) a la que se le otorgó pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto en los artículos 78, 117, 118, 119, 121 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; toda vez que se trata de un documento público, expedido por un servidor público, en el ejercicio de sus funciones aunada la circunstancia de que el Director enjuiciado, al dar contestación a la demanda, **reconoció** haber **ordenado** la aplicación de las medidas disciplinarias consistente en arresto por un determinado número de horas, lo que sin duda, en los términos del artículo 57 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, constituye una confesión expresa que hace prueba plena de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 del citado Código. . . . . . . . . . . . . . . . . .

***CUARTO.-*** Por ser su examen preferente y de orden público, se analiza en principio si, en la especie, se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que de actualizarse alguna, podría imposibilitar el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada. . . . . . . . . . . . . .

En el presente proceso, la autoridad demandada **sí planteó** causales de improcedencia, las previstas en las fracciones I y IV del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al referir que existe un consentimiento tácito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Respecto a la de improcedencia prevista en la fracción I **no se actualiza** en el asunto planteado; toda vez que con independencia de que la autoridad demandada considere que emitió las resoluciones impugnadas con legalidad, ello no acarrea la improcedencia del proceso; aunado a que la emisión de las boletas de arresto y su calificación, sí causa afectación a los intereses jurídicos del gobernado, pues se resolvió imponerle arrestos por determinado número de horas, en cada una de las boletas; lo que indudablemente sí incide en su esfera jurídica únicamente respecto de las boletas de arresto **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete) y **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta) **si sí se actualiza**, al no afectarse los intereses jurídicos de la parte actora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En efecto, se actualiza en el presente asunto dicha causal conforme a lo siguiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El *interés jurídico* constituye un requisito de procedibilidad en el proceso administrativo, por lo que es necesario que se promueva en contra de actos de la autoridad administrativa; y solamente lo tiene quien sea el titular de un derecho subjetivo de carácter administrativo, que esté reconocido o protegido a favor del actor por un precepto jurídico contenido en la ley y que resulte afectado con un acto de autoridad; en este caso, municipal; ello en congruencia a lo establecido por los artículo 243, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 251, fracción I, inciso a), del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; mismos que a la letra disponen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“Artículo 243.-*** *Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento*. . . . . . . . . . . . . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

*Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal podrán ser impugnados optativamente ante los Juzgados Administrativos Municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrán impugnar ante el otro el mismo acto”*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“Artículo 251.*** *Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión*:. . . . . . . . . . . .

1. *Tendrán el carácter de actor*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y…****”*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Así las cosas, las boletas de arresto número **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete) y **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta), no afectan sus intereses jurídicos, pues como se desprende de las mismas, y la propia autoridad demandada lo señaló, las boletas de arresto **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete) y **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta) no se califico si no que las mismas fueron **canceladas** por lo tanto, el director de policía no emitió sanción alguna al elemento de policía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Respecto de la boleta de arresto **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) visible a foja 55 cincuenta y cinco se aprecia que la boleta de arresto no fue emitida al actor del presente proceso si no a una persona diversa por lo tanto no afecta el interés jurídico del actor la boleta **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En virtud de lo antes expresado y, además, considerando que la doctrina jurídica en materia administrativa, define al interés jurídico como el: “*Derecho subjetivo de carácter administrativo”*; y el Tratadista Manuel Lucero Espinosa en su obra *“Teoría y Practica del Contencioso Administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación”,* Cuarta Edición aumentada, Editorial Porrúa, en la página 48 cuarenta y ocho, define el derecho subjetivo de carácter administrativo como: “*Aquel que se encuentra establecido por una Ley, Decreto, Reglamento, Resolución, Contrato u otra disposición administrativa que regula la actividad de la autoridad administrativa y limita su poder.”*; se tiene que en la presente causa administrativa, no se cumple con el requisito *“sine qua non”* de que la parte actora acredite la afectación a su interés jurídico, previsto en los ya señalados artículos 243, Párrafo Segundo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 251, fracción I, inciso a), del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para la procedencia del proceso administrativo; es decir, que exista un acto personal y directo que implique la violación de un derecho subjetivo tutelado a favor del accionante. . . . . . . . . . . . . .

Por lo que al quedar determinado que no hay afectación al interés jurídico del ciudadano (…), por la razón expuesta; se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa antes citado; por lo que es procedente **sobreseer** el presente proceso administrativo únicamente respecto a la boleta de arresto **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete) y **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Respecto a la causal de improcedencia establecida en la fracción IV **no se actualiza** pues el proceso administrativo fue promovido en tiempo y forma, pues la demanda fue presentada por escrito, dentro de los 30 treinta días siguientes a aquél en que el elemento de policía manifestó tener conocimiento de la calificación de las boletas de arresto, sin que de las constancias procesales se desprenda lo contrario, misma que manifiesta fue el día **1** de **julio** del año **2019** dos mil diecinueve y concretamente se presentó al **quinto** día, toda vez que aunque la autoridad refiere que fueron notificadas en fecha **23** de **marzo**, **05** de **abril,** **07** de **abril,** **22** de **abril, 6** de **mayo, 8** de **mayo, 22** de **mayo, 27** de **mayo** y **31** de **mayo** del año pasado, las mismas no refieren cuando fueron notificadas con la **sanción correspondiente** toda vez que ese el momento cuando es notificada la calificación de la boleta cuando empieza a correr el termino del actor por lo que, entonces al no desvirtuar la autoridad lo contrario se entiende que la actor tuvo conocimiento en la fecha que refiere en el hecho 1 de su escrito de demanda. . . .

Por otra parte, este juzgador, **oficiosamente no advierte**, de la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento que impida el estudio a fondo de las boletas de arresto **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once), por lo que resulta procedente el presente proceso administrativo.

***QUINTO.-*** En cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, este Juzgador procede a fijar clara y precisamente el punto controvertido en la presente causa administrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del escrito de demanda y de las constancias del proceso que nos ocupa, se desprende que los elementos de policía de nombre (…) emitieron las boletas de arresto al ciudadano (…), por diversas faltas disciplinarias; lo que a su parecer transgredía el artículo, 58 fracciones III y XI, del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boletas que fueron calificadas por el Director General de Policía Municipal, imponiendo al elemento de policía ahora actor, determinado un número de horas de arresto por cada una de las boletas de arresto, según se advierte en cada una de las boletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Actos que el promovente estima ilegales porque señala básicamente, que no se le respetó su garantía de audiencia para la calificación de las boletas, y que las mismas adolecen de fundamentación y motivación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La autoridad demandada por su parte, planteó que son improcedentes los conceptos de impugnación expresados, sosteniendo la legalidad de las boletas de arresto y su calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***SEXTO.-*** No existiendo impedimento legal, se procede a analizar los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, aplicando el principio de mayor consecuencia anulatoria de los actos impugnados y que pudieran traerle un mayor beneficio, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en toda sentencia; este Juzgador se avocará al estudio del concepto de impugnación que considera trascendental para emitir la presente resolución, como lo es el que se señala como **Primero**, del capítulo de los conceptos de impugnación, de su escrito de demanda; sin necesidad de transcribirlo en su totalidad, así como tampoco los restantes; sirviendo para ello el criterio sostenido por el Poder Judicial Federal en las siguientes Jurisprudencias:

***«CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).*** *El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades –órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales– lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta encierra.» PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Época: Novena Época, Registro: 1007661, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011 Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera Sección- Administrativa, Materia(s): Administrativa Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1275, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis XVI.1o.A.T. J/9*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.*** *El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.»* SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO número VI.2o.C. J/304Al visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.*** *El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. No. Registro: 196,477. Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998, Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

Así las cosas, en el **Primer** concepto de impugnación, el actor expresó básicamente que la autoridad demandada, Director General de Policía Municipal, vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia para la calificación de las boletas de arresto; pues no le concedió tal derecho y darle la oportunidad de defenderse.

La autoridad demandada, por su parte, sostuvo la legalidad de la calificación de los correctivos disciplinarios impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Este juzgador estima que es **fundado el concepto de impugnación planteado**, toda vez que el Director General de Policía no acreditó haberle dado la oportunidad al elemento sancionado de hacer alguna manifestación en su defensa, así como no fundó ni motivó debidamente la imposición de los correctivos disciplinarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En el caso concreto de las boletas de arresto con números de folio **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once); de cuyas sanciones, señaló el promovente, tuvo conocimiento el día **1** uno de **Julio** del año **2019** dos mil diecinueve; elaborada por los elementos de policía ya señalados; en los que se ordenó al ahora actor, se presente en calidad de arrestado, en tanto que el Director General de Policía, al calificar las infracciones -que como se dijo en el considerando inmediato anterior, no es otra cosa que la imposición de la medida disciplinaria-; incurrieron en violación a los derechos del elemento de policía, porque no se respetó, en el caso concreto, lo que dispone el artículo 103 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, vigente en el estado; en específico, en lo relativo a que en la aplicación de las medidas disciplinarias se respetará la garantía de audiencia; lo que se traduce en que la citada boleta de arresto precisada sea ilegal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tal precepto (Artículo 103 de laLey de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato),establece: “*En caso de que la falta cometida por un elemento de las Instituciones Policiales, no esté considerada como grave en los términos de la reglamentación respectiva, el titular de la unidad administrativa a la que esté adscrito, aplicará la sanción correspondiente, la que consistirá en amonestación, arresto hasta por 36 horas sin perjuicio del servicio o cambio de adscripción,* ***respetando siempre la garantía de audiencia.”*** (Énfasis añadido). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De la interpretación gramatical del precepto transcrito, se puede concluir que previamente a que se imponga alguna medida disciplinaria, tal como el arresto por un determinado número de horas, debe respetarse la garantía de audiencia del elemento; que no es otra cosa que el derecho, del elemento del cuerpo de seguridad pública de que se trate, de ser oído y tener la oportunidad de ofrecer pruebas a su favor, a efecto de desvirtuar los hechos o actos que se le imputen. . .

Sin embargo, en el caso de las boletas de arresto enunciadas, contrario a lo establecido por dicho precepto de la ley, -misma que establece los lineamientos en materia de seguridad pública para las autoridades municipales-; no se advierte que se haya respetado la garantía de audiencia del infractor, pues tal y como se aprecia en la misma, sólo se contiene una escueta motivación; pero no consta que se le haya citado al elemento de policía y que por escrito se hayan hecho constar los argumentos que haya vertido el elemento de policía en su defensa; por lo que de la boletas de arresto mencionadas, no se desprende que se haya citado y se le haya concedido plenamente al elemento de policía, el uso de la voz y la oportunidad de ofrecer pruebas para una apropiada defensa, en cuanto a los hechos que se le imputaron, que no es otra cosa que la garantía de audiencia a que tenía derecho; así como valorar sus manifestaciones; por lo que al no constar que se haya dado el derecho a ello, las boletas de arresto en mención, como ya se dijo en supralíneas, resultan ilegales; pues incluso, debía haberse acreditado que se llevó a cabo la audiencia de calificación, por escrito, siguiendo sus formalidades legales y fundando y motivado debidamente la imposición, de la sanción, lo que evidentemente no se hizo en el asunto que nos ocupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A mayor abundamiento se transcribe el contenido del artículo 203 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que establece: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***“Artículo 203.*** *Las medidas disciplinarias son las sanciones a que se hacen acreedores los integrantes de las Instituciones Policiales estatales y municipales, inclusive actuando como policía auxiliar, cuando desacaten los principios de actuación y las obligaciones que esta Ley y demás disposiciones jurídicas les asignen. Las sanciones que deban imponerse y los procedimientos para aplicarlas, se especificarán en lo particular para cada institución policial, en sus reglamentos respectivos, atendiendo a lo dispuesto por esta Ley. Deberán integrarse al expediente del infractor las resoluciones correspondientes. En la aplicación de las medidas disciplinarias se respetará la garantía de audiencia del infractor.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

De esta manera, al haberse emitido las sanciones de arresto por cada una, sin otorgarle debidamente el derecho de audiencia al presunto infractor, se produjo un vicio en el procedimiento que afectó la defensa del elemento sancionado; por lo que se incurrió en las causales de nulidad previstas en las fracciones II y III, del artículo 302, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; por lo que procede decretar la **nulidad total de** lasboletas de arresto con números de folio **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once); y de las sanciones contenidas; elaboradas por los elementos de policía de nombre (…); y calificadas por el Director General, imponiéndole en cada una de ellas, determinado número de horas de arresto por cada folio al elemento de policía (…). . . . . . . . . . . . .

Al caso resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala: . . .

***“AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTIA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA****. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica.”* No. Registro: 237,291. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 199-204 Tercera Parte. Tesis: Página: 85. Genealogía: Informe 1985, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 1, página 5. Apéndice 1917-1988, Segunda Parte, tesis 271, página 486. . . . . . . .

Por otra parte, cabe hacer la precisión de que, el actor en el presente proceso, sí resulta ser interesado y por ende, facultado para interponer el proceso administrativo; pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en su tercer párrafo, establece: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*“Para los efectos de este título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa* ***y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses...”*** *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

Es por ello que se considera que el elemento de policía actor, tiene el carácter de interesado, por lo que, al habérsele impuesto, por el titular de la dependencia, las medidas disciplinarias consistentes en el arresto; atento a lo que se señala en el primer párrafo del artículo 226 antes referido, puede válidamente impugnar dicha resolución ante autoridad jurisdiccional, como lo es este Juzgado Administrativo Municipal, mediante el proceso administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . .

***SEPTIMO.-*** En virtud de que los argumentos estudiados del Primer concepto de impugnación, resultaron fundados y son suficientes para declarar la nulidad total de los actos impugnados; resulta innecesario el estudio de los restantes, ya que su análisis no afectaría ni variaría el sentido de esta resolución. . . . . . . . . . . . .

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que a la letra dispone:

***“CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.*** *Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia.”* Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito. No. Registro: 223,103. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. I, Abril de 1991. Tesis: V.2o. J/7. Página: 86. Genealogía: Gaceta número 40, Abril de 1991, página 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 249, 261 fracción I, 287, 298, 299, 300, fracciones II y III, y 302, fracción III; del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es de resolverse y se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***R E S U E L V E*** *:*

***PRIMERO.-*** Este Juzgado Segundo Administrativo Municipal resultó competente para conocer y resolver del presente proceso administrativo. . . . . . . .

***SEGUNDO.-*** Resultó procedente el proceso administrativo interpuesto por el ciudadano (…), en contra de las boletas de arresto impugnadas y las sanciones derivadas de las mismas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***TERCERO***.- **Se sobresee** el presente proceso respecto de las boletas de arresto con números **82,225** (ochenta y dos mil doscientos veinticinco) **85,077** (ochenta y cinco mil setenta y siete) y **84,950** (ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta)**;** de conformidad con las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en el Considerando Cuarto de esta resolución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***CUARTO.-*** Se **decreta** la **NULIDAD TOTAL** de las sanciones administrativas impuestas por el Director General de Policía, contenidas en las boletas de arresto con números de folio **82,674** (ochenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro), **82,279** (ochenta y dos mil doscientos setenta y nueve), **82,780** (ochenta y dos mil setecientos ochenta) **83,383** (ochenta y tres mil trescientos ochenta y tres) **83,778** (ochenta y tres mil setecientos setenta y ocho), **83,887** (ochenta y tres mil ochocientos ochenta y siete), **84,312** (ochenta y cuatro mil trescientos doce), **84,384** (ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro), **84,511** (ochenta y cuatro mil quinientos once); elaboradas por el elemento de policía de nombre (…); y calificadas por el Director General de Policía y calificadas con un arresto de un determinado número de horas por cada boleta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo anterior con base en las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en el considerando Sexto de la presente sentencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notifíquese a la autoridad demandada por oficio; y a la parte actora personalmente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En su oportunidad, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido y dese de baja en el Libro de Registros que se lleva para tal efecto. . . . .

Así lo resolvió y firma el Licenciado **Ernesto Alejandro Mora Álvarez**, Juez Segundo Administrativo Municipal de León, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, la Licenciada **María del Rocío Villanueva Sánchez**, quien da fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .